



Ministerio de Economía

RESOLUCIÓN No. 336

MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las ocho horas del día veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Visto el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución número **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO**, emitida por este Ministerio a las nueve horas con treinta minutos del día cuatro de julio de dos mil dieciséis, por los licenciados **JULIO ENRIQUE VEGA ÁLVAREZ y KARLA MARÍA FRATTI DE VEGA** en su calidad de apoderados generales administrativos y judiciales de la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.**, Sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la ciudad de Panamá, República de Panamá, de nacionalidad panameña, autorizada para ejercer el comercio en El Salvador, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

CONSIDERANDO:

- I. Que por medio de la Resolución número **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO** del día cuatro de julio de dos mil dieciséis, se sancionó a la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.** con una multa de **MIL CIEN SALARIOS MINIMOS** equivalentes a **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, por no cumplir con lo establecido en los artículos 13 letra b) y 17 letra k) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo;
- II. Que en escrito presentado el día trece de febrero de este año, por los licenciados **VEGA ÁLVAREZ y FRATTI DE VEGA** en su calidad mencionada, recurren de la referida Resolución señalando que hay violación a los principios de presunción de Inocencia y Culpabilidad, ya que las presuntas inspecciones que advirtieron la deficiencia de peso que motivaron la imposición de la multa a su representada, se realizó en negocios independientes y no en su Planta de Envasado, por lo que no se le puede atribuir la falta de peso de los cilindros encontrados en establecimientos que no son propiedad de su representada, citando jurisprudencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo consideran que hay vicio en el proceso sancionador al haberse denegado a su representada la prueba que ofreció relacionada a la solicitud de inspección para establecer el procedimiento de llenado de los cilindros en las plantas envasadoras y por ende establecer el límite de responsabilidad una vez los cilindros salen de éstas, traduciéndose en una evidente vulneración al derecho de defensa de su representada, finalmente mencionan que hay un sólido pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema

de Justicia en sentencia definitiva referencia 175-2013 emitida a las once horas cincuenta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de las sanciones contenidas en la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo; en cuyo sentido la multa impuesta a su representada es desproporcional, por lo que solicitan se deje sin efecto la resolución de la que se recurre ya que no ha adquirido estado de firmeza.

- III. Que por las razones antes expuestas, se realizó una revisión del proceso sancionador, verificándose lo siguiente: a) Que atendiendo la presunción de inocencia alegado, este Ministerio considera apropiado mencionar, que este es un principio plenamente aplicable en el campo de las infracciones y sanciones administrativas; se constituye como una presunción iuris tantum, que exige que toda acusación sea acreditada con la prueba de los hechos en que se fundamenta. Tal garantía constitucional en materia administrativa, acompaña a quien se le imputa la comisión de una falta o infracción, en tanto no exista una sentencia condenatoria firme que establezca su culpabilidad. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en cuanto al alcance de este principio, declarando que: *"Toda persona sometida a un proceso o procedimiento, es inocente y se mantendrá como tal dentro del proceso o procedimiento, mientras no se determine su culpabilidad por sentencia de fondo condenatoria o resolución motivada, y respetando los principios constitucionales procesales..."* (Sentencia Amparo Ref. 360-97). Por otra parte, los apoderados de la Sociedad recurrente consideran que se ha violado el principio de defensa, creando una presunción de culpabilidad en contra de su representada, ya que la prueba ofrecida referente a la inspección solicitada para establecerse el proceso de llenado de los cilindros no fue valorada, siendo desestimada. En relación a la consideración antes alegada, es conveniente establecer que consta en el expediente administrativo que la Dirección de Hidrocarburos y Minas consideró pertinente desestimar dicha prueba por referirse a un tema que no estaba relacionada con la infracción que era objeto del procedimiento administrativo sancionador, en razón de que ésta se refería al procedimiento de llenado de cilindros de GLP y no sobre la falta de peso encontrada en los cilindros verificados, y de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos que establece: «Las pruebas serán apreciadas según las reglas de la sana crítica, utilizando un sistema racional de deducciones que guarde concordancia con todas las pruebas del procedimiento(...)»; constatándose que no hay concordancia con la inspección solicitada y los hechos generadores de la sanción, por lo que se confirma lo manifestado por parte de la referida Dirección en el auto emitido con fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis. En lo que se refieren a que la precitada Dirección, ha imputado a su poderdante una conducta que carece de fundamento legal, pues los hechos consignados en las referidas actas se refieren a inspecciones realizadas en diversos lugares del país y en establecimientos comerciales que son totalmente ajenos a su representada, y no demuestra con pruebas fehacientes que ésta ha incurrido en la infracción imputada, este Ministerio considera pertinente mencionar que la precitada

Ley ha señalado en su artículo 9-B lo que sigue: *"todas las empresas envasadoras de GLP están obligadas a entregar el contenido exacto de gas en cada envase cilíndrico portátil para gas licuado de petróleo, correspondiente al peso establecido en cada presentación; en consecuencia, al realizar inspecciones a distribuidores mayoristas o lugares de venta, la responsabilidad del incumplimiento del peso, es de la planta envasadora, toda vez el sello de inviolabilidad se encuentre intacto. El reglamento establecerá los correspondientes márgenes de tolerancia en el peso de los envases cilíndricos portátiles, así como el procedimiento para su verificación."*, en este sentido, la Ley ya instituyó un vínculo entre el producto que se está comercializando –GLP– y su envasador, el que no se rompe a pesar de que el cilindro se encuentre en manos de un tercero, siempre que exista el "sello de inviolabilidad", lo cual garantiza que dicho producto no ha sido manipulado por un tercero; en consecuencia, es evidente que en el proceso iniciado a la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, sí se ha cumplido con el tipo determinado en la Ley, es decir, se encontraron cilindros en los puntos de venta con el sello de inviolabilidad propiedad de dicha Sociedad y con menos peso que el establecido en los instrumentos que regulan este aspecto. En este orden de ideas, es apropiado señalar que incumplir con el peso de los cilindros es una acción imputable a la Sociedad antes citada, cuando exista el respectivo sello de inviolabilidad, debido a que previo a ser colocado éste, las envasadoras deben de pesar el cilindro a fin de verificar antes de que sea comercializado, que la cantidad que tiene es la correcta y así no causar un perjuicio a los consumidores del producto; y es el sello en referencia el que le garantiza al consumidor que el producto que ha comprado tiene todos los estándares de calidad ofertados, y su incumplimiento únicamente es imputable a la Sociedad que envasa el Gas Licuado de Petróleo. En el caso que nos ocupa y con el objeto de respetar el debido proceso, la Dirección de Hidrocarburos y Minas mandó oír a la citada Sociedad garantizándole su Derecho de Audiencia y Defensa, a efecto de que ésta participara en el proceso iniciado y desvirtuara los hechos que se le atribuían; no obstante lo antes relacionado, la citada Sociedad no ha desvirtuado el contenido de las actas de inspección, por lo que la Dirección considera que dicha Sociedad infringe la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. Es en este último punto donde es importante reiterar nuevamente y concluir además, que a pesar de que el sujeto que fue inspeccionado no es la Sociedad Tropigás de El Salvador S.A., sí se ha cumplido con el tipo establecido en la Ley, es decir, infringiendo lo determinado por ella, y que sobre los hechos presentados los apoderados no han probado que no hay responsabilidad por parte de su representada en los hechos acotados. En relación a la argumentación por parte de los apoderados referida a la inconstitucionalidad de la sanción impuesta a su mandante, es pertinente señalar que la Sentencia 175-2013 emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dice *"...en aras de la seguridad jurídica, la presente decisión no afectará en modo alguno las sanciones que de forma previa a la misma hubieren sido impuesta a sujetos infractores por parte titular del Ministerio de Economía de conformidad con la competencia que le otorga el Art. 19 de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, en relación a las infracciones menos graves,*

graves y muy graves establecidas en el Art. 18 de esa misma ley."; en este sentido, la aplicabilidad de la citada Sentencia es clara y no afecta de modo alguno las sanciones que fueren impuestas bajo la normativa aplicable.

- IV. Que en el desarrollo de la Resolución recurrida, se verifica que la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.**, incumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 13 letra b) y 17 letra k) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. Es así que se considera que el proceso administrativo en comento se efectuó apegado a derecho.

POR TANTO:

De acuerdo a las consideraciones anteriores, razones expuestas, disposiciones legales citadas, teniendo como fundamento lo establecido en los artículos 1 y 11 de la Constitución; 9-B, 13 letras d) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y 1, 3, 212, 215, 216, 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Ministerio,

RESUELVE:

- 1) **NO HA LUGAR** el Recurso de Revisión interpuesto por los licenciados **JULIO ENRIQUE VEGA ÁLVAREZ** y **KARLA MARÍA FRATTI DE VEGA** en su calidad de apoderados generales administrativos y judiciales de la Sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.**
- 2) **RATIFÍQUESE** en todo su contenido, la Resolución número **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO**, pronunciada por este Ministerio, en esta ciudad, a las nueve horas con treinta minutos del día cuatro de julio de dos mil dieciséis.

NOTIFÍQUESE.



[Handwritten signature]
THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GÚZMAN
MINISTRO

EAA/AM